

Sección latinoamericana

BOLIVIA

Una coyuntura crítica

Numerosos analistas coinciden en afirmar que los acontecimientos registrados en Bolivia en el segundo semestre de 1979 revelan que el país atraviesa por una coyuntura sumamente compleja, cuyo desenlace aún es objeto de las más diversas especulaciones. La acumulación de contradicciones y de conflictos económicos, sociales y políticos, además de entorpecer la restauración de la vida democrática en el país, puede provocar cambios significativos en la conducción de los asuntos internos y repercutir más allá de las fronteras nacionales, alterando el frágil equilibrio existente en el Cono Sur.

Tal como la describen los observadores, la actual situación tiene su origen inmediato en varios elementos estrechamente vinculados: a] las crecientes dificultades económicas que el país ha tenido en los últimos años y que, de acuerdo con estimaciones oficiales, se agravaron en 1978 y 1979, debido tanto a factores internos cuanto a los efectos de la crisis mundial; b] el permanente clima de descontento y agitación social,

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en los casos en que así se manifieste.

manifiesto principalmente entre los mineros, los campesinos y los sectores medios, al cual los militares respondieron con la represión, ante la imposibilidad de controlarlo por medios pacíficos; c] la reanimación de la oposición política legal para instaurar un gobierno democrático dirigido por civiles y la resistencia de algunos sectores castrenses a aceptar el voto popular y regresar a los cuarteles, y d] la vigorosa ofensiva del pueblo para impedir la restauración de la dictadura militar y consolidar a un régimen que, si bien aún no satisface todas sus demandas, al menos no ejerce el poder despóticamente.

La evolución económica reciente

Según diversos estudios, los elementos fundamentales de la actual crisis boliviana comenzaron a desarrollarse durante el régimen de Hugo Bánzer. En efecto, en 1971 Bánzer asumió el poder apoyado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y por el Gobierno brasileño. En 1974 las fuerzas armadas hicieron pública su estrategia político-económica, consistente en dos objetivos básicos: transformar al país en un "Estado nacional moderno y alcanzar la estabilidad política y la paz social." Para conseguir esas metas, el "modelo" militar preveía la necesidad de estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera; desarrollar la infraestructura física; estimular las exportaciones no tradicionales; aplicar un proteccionismo en las importaciones; alcanzar la estabilidad

monetaria, e impedir el monopolio en la oferta de trabajo. Paralelamente, se proponía lograr un desarrollo social —"dentro de los valores cristianos"—, así como la "justa distribución de la riqueza", incorporar a los trabajadores al proceso económico y cultural, y sustituir los sindicatos por "coordinadores laborales".

Dos años después, en octubre de 1976, se celebró una reunión de comandantes de grandes unidades e institutos militares en la que se formuló un documento ("Misión de las fuerzas armadas en el desarrollo y la seguridad nacional") en el que se planteaban objetivos de "desarrollo" a mediano plazo, consistentes en acelerar la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) y garantizar la paz social y la estabilidad interna de acuerdo con las resoluciones de la XI Conferencia de Ejércitos Americanos celebrada en Montevideo, en octubre de 1975.

Cabe señalar que la preocupación principal en esa reunión fue la "infiltración comunista" y que se planteó que la solución era la "seguridad nacional". Las conclusiones a las que llegaron los militares fueron las siguientes: que ellos, los militares, debían tener "un protagonismo político más acentuado" en sus respectivos países; que los ejércitos debían actuar de manera conjunta para formar una Fuerza Latinoamericana de Intervención verdaderamente operativa, y que el "enemigo común" de la seguridad latinoamericana es la "subversión marxista". De acuerdo con estos planteamientos,

los gobiernos militares debían condicionar el desarrollo socioeconómico a la "seguridad nacional".

En esencia, esos principios fueron los que rigieron la política económica impulsada por Bánzer.

En un principio, el régimen militar obtuvo resultados aparentemente ventajosos. En efecto, de 1974 a 1976 el PIB mantuvo una tasa anual de crecimiento de 6.8%, aproximadamente, considerada como una de las más altas de la región. El total de las exportaciones aumentó de 271 millones de dólares en 1973 a 558 millones de dólares en 1976, debido a los aumentos de los precios mundiales del estaño y del petróleo. En los mismos años, las reservas monetarias crecieron de 41 millones de dólares a 165 millones; el tipo de cambio se mantuvo estable (20.40 pesos bolivianos por dólar) y la tasa de inflación disminuyó —según cifras oficiales— de 34% en 1973 a 12% en 1976. El ahorro interno aumentó de 1 059 millones de pesos bolivianos en 1973 a 2 665 millones en 1975 y el coeficiente de ahorro interno subió de 8% en 1971 a 17% en 1975. La deuda externa también creció, de unos 800 millones de dólares en 1971 a 3 101 millones de dólares en 1978.

En las cifras anteriores destaca la evolución de las exportaciones. En 1974, casi 60% de las ventas eran de origen minero, 30% procedía del petróleo y sus derivados y 10% de la agricultura. En los años siguientes esta estructura varió considerablemente, ya que el país dejó de exportar crudo para convertirse en importador neto.

En cuanto a la minería, Bolivia es un tradicional productor de estaño, plata, plomo, cobre, bismuto, antimonio, wolframio, cinc y oro. El estaño es el principal producto de exportación. Sin embargo, de 1971 a 1977 la producción de este metal disminuyó de 30 290 toneladas a 28 112. En cambio, su precio internacional aumentó considerablemente, de 1.58 dólares por libra fina en 1971 a 4.58 dólares en enero de 1977.

Señalan los analistas que esta alza en el precio del estaño favoreció al Gobierno de Bánzer, ya que le procuró una entrada adicional de divisas. Empero, es preciso recordar que Estados Unidos tiene unas reservas "estratégicas" consi-

derables (estimadas en más de 100 000 ton) que utiliza para regular la cotización mundial del metal. Así, cuando al inicio de 1977 el precio tuvo una fuerte subida, el Gobierno de Washington anunció que pondría a la venta unas 30 000 toneladas de estaño, para abaratarlo. En esa ocasión, el Gobierno de Bánzer acudió a maniobras diplomáticas e impidió que se realizara esa operación, que hubiera sido catastrófica para el país.

Unos meses más tarde, Estados Unidos ingresó al Consejo Internacional del Estaño, desde donde ha proseguido sus presiones para impedir posibles aumentos en los precios, al tiempo que continúa con sus amenazas contra Bolivia, tal como se evidenció durante el segundo semestre de 1979, lo que obligó a Walter Guevara Arze, primero, y a Lidia Gueiler, después, a protestar ante los foros internacionales por la política de *dumping* seguida por los estadounidenses.

En lo que respecta a los demás sectores de la minería, los volúmenes de producción también mostraron una tendencia más o menos pronunciada a la baja, excepto en el bismuto, que se mantuvo estable, y en el wolframio y el antimonio, que tuvieron un leve incremento.

En cuanto a los hidrocarburos, la evolución de las cifras es similar a lo ocurrido en la minería. En efecto, en 1971 Bolivia exportaba 1.3 millones de metros cúbicos de gas, con un valor aproximado de 24 millones de dólares, mientras que en 1977 el volumen disminuyó a 713 000 metros cúbicos, con un valor de 66.8 millones de dólares. Al año siguiente, como ya se dijo, Bolivia suspendió sus envíos y se convirtió en importador neto.

Por otra parte, durante el régimen de Bánzer las importaciones crecieron considerablemente, estimuladas por la "bonanza" del país. Así, de 1971 a 1977 aumentaron casi cuatro veces, pasando de 168 millones de pesos bolivianos a 617 millones de pesos, respectivamente, y su composición tuvo cambios significativos. Para el primer año, los bienes de consumo representaban 19.9% del total, mientras que al final de ese lapso llegaron a 20.5%. En cuanto a las materias primas y productos intermedios, en 1971 representaban 29.9% y ascendieron a 35.5%, mientras los bienes de capital pasaron de 49.4 a 43.3 por ciento.

Tal evolución, aunada a la disminución del volumen de las exportaciones de petróleo y estaño, tuvo como resultado el progresivo debilitamiento de la producción y la aceleración del endeudamiento externo. Según el Ministro de Planeamiento, el saldo de la deuda pública externa aumentó de 524.4 millones de dólares en 1970 a 882.9 millones de dólares en 1975; en 1976 alcanzaba 2 000 millones de dólares y en 1977 se estimaba en 2 400 millones de dólares.

Los problemas económicos de Bolivia se intensificaron en 1978. El PIB creció a una tasa de 3.5%, que contrastó con las obtenidas en 1977 (4.8%) y 1976 (6.7%).

Según los especialistas, dos elementos contribuyeron a esa brusca desaceleración: la caída en la producción del estaño y el petróleo y el crecimiento de la tasa de inflación (13.4% anual). Ambos problemas se combinaron de tal manera que agravaron las tensiones sociales, lo que se tradujo en un permanente clima de inestabilidad política, acarreado por la aplicación de un programa económico de austeridad. En efecto, el Gobierno restringió el gasto público en 30%, limitó los créditos comerciales y el endeudamiento externo y puso topes a los aumentos salariales.

Estas medidas fueron mal recibidas por la población civil, principalmente por los trabajadores, quienes respondieron con una intensa movilización en las principales ciudades y en los centros mineros. Esta agitación fue canalizada por los partidos políticos, para asegurar su triunfo en las elecciones, previstas para el 9 de julio de ese año.

La escena política

El 9 de noviembre de 1977 el Gobierno de Bánzer anunció la celebración de elecciones presidenciales el 9 de julio del año siguiente. Para tal efecto, un mes después de su anuncio propuso delegar provisionalmente la presidencia en el general Juan Pereda Asbún, con objeto de postular su candidatura.

Bánzer, que daba por descontado el apoyo de los militares y de una buena parte de la población civil, vio frustradas sus intenciones, pues no pudo conseguir el consenso deseado. Por el contrario, el solo anuncio de su posible postulación desató una serie de tensiones políticas,

en las que se cuestionaba la permanencia y continuidad de su régimen.

Para aplacar la incertidumbre política, las fuerzas armadas proclamaron la candidatura de Juan Pereda Asbún, al tiempo que Bánzer advertía sobre la posibilidad de suspender indefinidamente las elecciones.

Pese a esas amenazas, las primeras elecciones presidenciales en 12 años se realizaron en la fecha prevista, en las cuales Pereda Asbún obtuvo 50.03% de los votos.

Empero, los partidos de oposición acusaron al Gobierno de haber cometido fraude y solicitaron ante la Corte Nacional Electoral (CNE) la anulación de esas elecciones. La acusación fue respaldada por los observadores internacionales, y el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo pública su "preocupación" por las irregularidades cometidas en el proceso electoral. Por su parte, el principal candidato de la oposición, Hernán Siles Zuazo, de la Unión Democrática Popular (UDP), se declaró en huelga de hambre como protesta por el fraude.

Diez días después de las elecciones, el propio Pereda Asbún solicitó a la CNE la anulación de las elecciones y la convocatoria para nuevos comicios en un plazo de 180 días.

Finalmente, el 21 de julio, Hugo Bánzer renunció a su cargo de presidente y entregó el poder a un triunvirato militar, el cual, a su vez, lo transfirió a Pereda Asbún.

Sin embargo, los problemas políticos no terminaron con esa designación. En efecto, un mes después de asumir la presidencia, el general Juan Pereda anunció que las próximas elecciones no se realizarían sino en julio de 1980, "para que el sufragio del pueblo esté garantizado por leyes adecuadas".

Las protestas no se hicieron esperar. La oposición política y obrera rechazó el proyecto electoral y exigió que la convocatoria fuera en un plazo más breve, ya que el planteamiento gubernamental buscaba frenar el avance de la izquierda. La negativa del nuevo Gobierno a cumplir con su compromiso de celebrar los comicios en un plazo de 180 días dividió a las fuerzas armadas en dos bandos. Uno de ellos, mayoritario, se pronunciaba por entregar el poder a

quien resultase vencedor en las elecciones. El otro pretendía conservarlo indefinidamente.

Esta pugna interna dio por resultado que el 24 de noviembre de 1978 el Comando General del Ejército depusiera a Juan Pereda y en su lugar designara al también general David Padilla Arancibia.

Padilla Arancibia de inmediato adoptó varias medidas tendientes a apaciguar las tensiones. Entre ellas destacan la convocatoria a elecciones generales para el primer domingo de julio de 1979 y el compromiso de entregar el poder el 6 de agosto "a quien resultase legítimamente elegido por el pueblo".

El Gobierno de Padilla cumplió su compromiso y el 1 de julio de 1979 se realizaron los comicios para designar un nuevo gobierno civil y poner fin a casi 15 años de regímenes militares.

En la justa electoral participaron candidatos de casi todas las fuerzas políticas existentes en el país. De ellos, sólo dos destacaron como principales: Hernán Siles Zuazo, candidato de la UDP, de centro izquierda, y Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de tradición derechista.

En un primer momento, Siles Zuazo fue confirmado oficialmente como el vencedor por mayoría relativa; sin embargo, poco después, el Congreso se negó a reconocerlo, debido a que no había obtenido 50.1% de los votos, como lo señala la ley.

Para amplios sectores sociales tal decisión representaba una sucia maniobra para impedir el ascenso de la izquierda al Gobierno y permitir, en cambio, la designación de Paz Estenssoro. Esta situación provocó una oleada de agitación política, que obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia y a citar al Congreso para designar a un presidente interino, nombramiento que recayó en Walter Guevara Arze, quien era presidente del Senado.

El nombramiento se logró después de seis votaciones de los 144 diputados y senadores del Congreso boliviano. El 8 de agosto, Guevara Arze asumió la presidencia interina del Gobierno de Bolivia, para un período de un año.

La designación de Guevara, considerada como una solución de compromiso, prometía ser un buen inicio para la

restauración de la democracia en Bolivia. Sin embargo, muy pronto se esfumaron las ilusiones. En efecto, el 1 de noviembre, tras una intensa campaña de desestabilización, las fuerzas armadas dieron un golpe de Estado, dirigidas por el ex-ministro de Agricultura de Bánzer, Alberto Natush Bush.

La respuesta popular a esta agresión no se dejó esperar. La mayoría de la población, las organizaciones sindicales y políticas y la Iglesia católica condenaron el golpe y declararon una huelga nacional. Paralelamente, el Congreso se reunió en la clandestinidad, repudiando al gobierno golpista.

La agitación política y los combates callejeros impidieron que Natush se consolidara y lo obligaron a renunciar el 15 de noviembre. Al día siguiente, el Congreso designó como nueva Presidenta de la República a Lidia Gueiler Tejada, quien hasta ese momento fungía como presidenta del Congreso.

En los escasos dos meses que lleva al frente del Gobierno, Lidia Gueiler no ha logrado consolidar el ansiado proceso de democratización. Las decisiones adoptadas durante este lapso, más que relajar las tensiones sociales, las agravaron. En efecto, el Gobierno de la señora Gueiler aprobó un plan económico consistente en devaluar 25% el peso boliviano, elevar el precio de la gasolina, las tarifas de transporte y los precios en general, lo que provocó que la Central Obrera Boliviana (COB) convocara a la huelga para obligar al Gobierno a revocar su "paquete económico". Los campesinos, por su parte, bloquearon las carreteras y los caminos para exigir atención a sus requerimientos.

Para los observadores, la decisión de la poderosa COB colocó a la Presidenta en una posición débil. Incluso se llegó a afirmar que sus horas estaban contadas.

Ante esta difícil situación, el Consejo de Ministros se enfrentó al riesgo de ser censurado por la Cámara de Diputados, por lo que presentó una renuncia colectiva.

A mediados de enero de 1980, el Gobierno boliviano continuaba sometido a la presión de un posible golpe militar antidemocrático, lo cual provocó una ola de rumores sobre una suspensión de las elecciones generales que deberán celebrarse en julio próximo. Estos rumores

motivaron a la COB a afirmar que los trabajadores cuentan con un mecanismo de defensa antigolpista de alcance nacional y de aplicación inmediata. Añadió que su millón de afiliados "son conscientes de ser la garantía del proceso demo-

crático, como lo demostraron los acontecimientos de noviembre pasado, y no quieren más dictaduras hambreadoras, entreguistas y torturadoras".

De acuerdo con algunos analistas, el

proceso de democratización boliviano requiere de un amplio apoyo de las masas populares; sin ellas o contra ellas, la crisis política seguirá descomponiendo al Estado y podrá empujar al país a una guerra civil. □

recuento latinoamericano

Asuntos generales

La Internacional Socialista canceló una gira

La Internacional Socialista (IS) suspendió la gira que una delegación suya iba a realizar por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para elaborar un informe sobre la situación política y los derechos humanos en el Cono Sur.

La misión estaba presidida por Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Bernt Carlson, secretario general de la IS.

Según se informó oficialmente, la decisión de cancelar la gira se debió a que los gobernantes argentinos se negaron a entrevistarse con los miembros de la delegación, en tanto que en Chile y Uruguay se les negó la visa de acceso al país. En cambio, la misión irá a Paraguay, donde asistirá al congreso del Partido Febrerista, miembro de la Internacional Socialista.

Segundo Simposio de Cooperación Empresarial entre América Latina y Europa

Del 20 al 22 de noviembre se realizó en Montreux, Suiza, el Segundo Simposio de Cooperación Empresarial entre América Latina y Europa, organizado por el European Management Forum con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

En esta ocasión, unos mil funcionarios bancarios y empresarios de América Latina y Europa analizaron los problemas que afectan las relaciones económicas entre ambas regiones.

Préstamos del BID

El BID aprobó en octubre varias operaciones de crédito y cooperación técnica con países de América Latina: Guatemala (15 millones de dólares), Honduras (7.3 millones), Jamaica (10 millones),

Perú (8.7 millones) y República Dominicana (31 millones de dólares). Esos empréstitos se destinarán a la construcción de diversas obras de infraestructura, turismo y agricultura.

Reunión del Grupo de los 77

Representantes ministeriales de 120 países subdesarrollados miembros del "Grupo de los 77" se reunieron en La Habana, del 13 al 22 de diciembre, para preparar su posición conjunta ante la III Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que se celebrará en Nueva Delhi a finales de enero.

Algunas de las proposiciones que se harán a la III Conferencia son las siguientes: que en el próximo decenio se destine al desarrollo una suma adicional de 300 000 millones de dólares; transferir al desarrollo pacífico de los países subdesarrollados, parte de los recursos dedicados a la carrera armamentista; cancelar la deuda externa de los países de menor desarrollo y de los más seriamente afectados por la actual crisis internacional; otorgar trato preferente a los países menos desarrollados y destinarles una tercera parte del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y respaldar la iniciativa para que la ONUDI adquiera categoría de organismo especializado.

Conferencia regional de educación

El 13 de diciembre concluyó en la ciudad de México la V Conferencia Regional de Ministros de Educación y Planeación Económica de América Latina y el Caribe, que reunió a representantes de 27 países del hemisferio miembros de la UNESCO. Los participantes aprobaron la Declaración de México, en la que se plantea llegar a la escolarización básica de ocho a diez años, lo cual requiere que el gasto en educación llegue a ser 7 u 8 por ciento del PNB. También se aprobó aplicar una "decidida" política

contra el analfabetismo, con el fin de eliminarlo de la región antes de 20 años, así como ampliar los servicios educativos para los adultos.

Al destacar la estrecha relación entre educación y desarrollo, los participantes acordaron dar especial atención educativa a los grupos sociales más desfavorecidos e impulsar la instauración de un nuevo orden económico internacional.

Estados Unidos ratifica el convenio azucarero

El 2 de enero, el Gobierno de Estados Unidos anunció que ratificaría el Convenio Internacional del Azúcar, elaborado hace dos años con su participación y que hasta la fecha no había aplicado a pesar de ser el mayor comprador mundial del dulce. La decisión estadounidense fue bien recibida por los países productores, quienes en varias ocasiones criticaron la incongruencia del Gobierno de ese país, que había participado activamente en la elaboración del convenio y luego no lo ratificó, limitando así sus alcances. □

Argentina

Salvoconducto a Cámpora

El 26 de noviembre, la Junta Militar argentina otorgó el salvoconducto para que el ex-presidente Héctor J. Cámpora abandonara aquel país y viajara a México, poniendo fin a tres años y cinco meses de asilo en la embajada mexicana en Buenos Aires. Al día siguiente, Cámpora, acompañado de su esposa, de uno de sus hijos y uno de los médicos que lo asisten, llegó a México, donde seguirá un tratamiento contra el cáncer de laringe que padece.

Intentan despolitizar a los sindicatos

El 15 de noviembre, el Gobierno de Jorge Videla dio a conocer una nueva

ley para los trabajadores, que se funda en "la libertad de agremiación, la erradicación de la política de los sindicatos, la representatividad de los dirigentes y el riguroso control de los fondos gremiales". □

Belice

Elecciones parlamentarias

El 21 de noviembre se realizaron elecciones en Belice para los 18 diputados al Parlamento. El Partido Unico del Pueblo, del primer ministro George Price, obtuvo la victoria con una mayoría de 12 escaños. El Partido Democrático Unido, de oposición, obtuvo las seis bancas parlamentarias restantes. □

Brasil

Ley que disuelve los partidos políticos

El 22 de noviembre fue aprobada la nueva ley de partidos políticos propuesta por el presidente João Baptista Figueiredo, que disuelve las dos organizaciones vigentes hasta ahora (la Alianza Renovadora Nacional —ARENA—, oficialista, y el Movimiento Democrático Brasileño —MDB—, de oposición) y mantiene la proscripción de varios partidos de izquierda, entre ellos el Comunista Brasileño (PCB). A la vez, el nuevo ordenamiento controlará la formación de las nuevas asociaciones políticas.

La ley entrará en vigor cuando el Tribunal Supremo Electoral la ratifique. De ser así, los partidos de nueva formación se podrán registrar en marzo próximo y las elecciones municipales, previstas para principios de 1980, deberán postergarse.

Maxidevaluación

El 7 de diciembre, las autoridades financieras de Brasil anunciaron una devaluación del cruzeiro de 30% en relación con el dólar, así como la reducción de los créditos subsidiados. Según Delfim Netto, ministro de Planeación, esas medidas "conducen a una economía de mercado plena". Agregó que también provocarán una "reducción de la inflación" y el aumento del número de empleos. Sin embargo, diversos medios informativos destacaron que, al concluir 1979, la economía brasileña tenía más dificultades que en el año anterior. Señalaron, por

ejemplo, que la inflación llegó a 75%, la más alta en el decenio; que la deuda externa se elevó hasta 46 000 millones de dólares, y que el déficit de la cuenta corriente llegó a 10 700 millones.

Convenio con Irak

Para garantizar su abastecimiento de petróleo, a fines de noviembre último, el Gobierno de Brasil suscribió con Irak el llamado Pacto de Bagdad. En dicho documento se establece que Irak suministrará petróleo a Brasil a los precios que fije la OPEP. Por su parte, Brasil instalará en Irak una planta para fabricar carros blindados y le venderá armamento. A fin de disminuir el superávit comercial de 1 500 millones de dólares anuales que Irak tiene con Brasil, los empresarios de este país participarán en diversos proyectos iraquíes. Por otra parte, como Irak aporta 40% de las necesidades de petróleo de Brasil, el presidente Figueiredo designó como embajador en Bagdad al ex-Jefe del Estado Mayor, pues el Gobierno de aquel país quería que el representante tuviera línea directa con el Presidente. □

Costa Rica

Problemas laborales

Los 4 000 trabajadores bananeros en la empresa transnacional Standard Fruit Company, en la costa atlántica, iniciaron el 21 de diciembre una huelga para obligar a la empresa a cumplir con la cláusula del contrato de trabajo que establece la jornada laboral de siete horas. En respuesta, la empresa despidió a 50 trabajadores, suspendió a 400 y amonestó a más de mil.

Al iniciarse el conflicto, el Ministro de Trabajo se ofreció como mediador, lo cual no fue aceptado por las partes. Frente a la negativa empresarial de resolver el conflicto, la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica (CGT-CR) anunció que paralizaría todo el sector bananero en la costa atlántica y, de ser necesario, a todos los trabajadores del sector.

El 8 de enero, el presidente Carazo acusó a los sindicatos y al Partido Vanguardia Popular (comunista) de organizar una conjura "con el propósito de causar grandes perjuicios a la economía costarricense".

El día 10, los obreros bananeros en la United Brands, en la costa del Pacífico, se solidarizaron con sus compañeros del Atlántico, y los trabajadores de Puerto Limón y de otras ramas anunciaron que declararían la huelga de solidaridad. En respuesta, el Gobierno envió fuerzas de la guardia civil y de la guardia de asistencia rural "para garantizar" a los trabajadores que quisieran romper la huelga. □

Cuba

Reorganización gubernamental

El Consejo de Estado, máximo órgano de Gobierno de la República de Cuba, el 11 de enero acordó realizar varios cambios en los ministerios, con el fin de superar "deficiencias administrativas y rasgos de debilitamiento en la disciplina laboral de algunos sectores". Con tal motivo, el Consejo de Estado redistribuyó los cargos de control y coordinación del trabajo de los organismos de Estado. El presidente del Consejo, Fidel Castro Ruz, supervisará la acción de los ministros de las Fuerzas Armadas, Interior, Salud Pública y Cultura, labor en la que será auxiliado por el vicepresidente Raúl Castro. En nueve ministerios se removió al titular: Justicia, Industria Básica, Industria Azucarera, Educación, Agricultura, Comercio Exterior, Industria Liger, Pesca y Siderúrgica.

Dos vicepresidentes del Consejo se harán cargo de los ministerios del Interior y Salud Pública. Los anteriores titulares desempeñarán otras funciones, al igual que los responsables del Comité de Estado de Trabajo y del Instituto Nacional de Turismo.

Asimismo, se crearon nuevos ministerios, que absorben las funciones y parte del personal de los antiguos ministerios de Industria Química, Industria Eléctrica, Minas y Geología, y Materiales de Construcción, así como a los comités estatales de Ciencia y Técnica y de la Construcción y a los institutos de la Infancia, la Demanda Interna y el Desarrollo Forestal.

La reorganización gubernamental, esperada después de las fuertes críticas de Raúl Castro contra la burocratización, la irresponsabilidad administrativa y el mal uso de los recursos disponibles, busca elevar la eficacia administrativa que per-

mita resolver problemas que afectan a la población. □

Chile

Nuevos ministros, la misma política

El 14 de diciembre el general Augusto Pinochet incorporó a su gabinete siete nuevos ministros, en las carteras de Economía, Educación, Tierras y Colonización, Salud, Transporte y Telecomunicaciones, Secretaría General de Gobierno y el Comité Asesor de la Junta. Salvo los ministerios de Economía y Educación, los otros cargos fueron ocupados por militares.

La reestructuración del gabinete fue considerada como una maniobra tendiente a ocultar el crecimiento de las protestas y la acción de los funcionarios corruptos. Es por ello que la Junta cambió algunos rostros secundarios, pero mantuvo en su lugar a los personajes más cercanos a Pinochet.

Balance de la privatización

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) informó que en 1979 vendió ocho empresas industriales, un banco comercial, 15 establecimientos hoteleros y paquetes accionarios de otras empresas, todo ello con un valor de 145 millones de dólares. Con estas medidas de privatización del patrimonio del pueblo chileno, ya llega a 159 el número de empresas, paquetes de acciones o activos, con valor de 762 millones de dólares, vendidos desde 1974.

La Gerencia de Normalización de la Corfo anunció que en 1980 espera vender 18 empresas más, en las que el Estado controla de 50 a 100 por ciento del capital. □

Ecuador

Crisis de Gobierno

El 29 de noviembre el presidente ecuatoriano, Jaime Roldós, recibió la renuncia colectiva de 12 ministros de Estado y altos funcionarios de la administración que integran el gabinete. Este hecho constituyó la primera crisis de Gobierno, la cual —según los observadores— tendrá como fin una reestructuración del gabinete para asegurarle un mayor apoyo parlamentario a Roldós.

La crisis fue anunciada por el diario *El Comercio* desde el 16 de noviembre, haciendo eco a rumores y especulaciones surgidos a raíz de la apertura de negociaciones entre el Ministro de Gobierno, Roberto Dunn, y representantes de diversos sectores del Congreso para buscar un acercamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo. □

El Salvador

Golpe de Estado

El 15 de octubre último, las fuerzas armadas de El Salvador destituyeron al presidente Carlos Humberto Romero y establecieron una Junta de Gobierno cívico-militar de cinco miembros, encabezada por los coroneles Adolfo Arnoldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez. En diversos medios se informó que esta medida fue adoptada por la incapacidad que mostró Romero para garantizar un mínimo de estabilidad y porque la lucha político-militar amenazaba con transformarse en una verdadera insurrección popular.

En efecto, pese a la violenta represión que ejercía el Gobierno de Romero, el descontento, las manifestaciones populares y la acción de los grupos armados iban en ascenso. Es por ello que las diversas corrientes de opinión que hay en las fuerzas armadas, en unión del Partido Demócrata Cristiano y algunas organizaciones nacionalistas y de izquierda, acordaron sustituir a Romero y así abrir paso a un período en el cual se aplicara un programa de emergencia. En la proclama inicial de la Junta de Gobierno se dice que se procederá a crear las condiciones necesarias para restablecer la vida democrática y para realizar reformas estructurales en la economía, la política y la sociedad.

Entre las primeras medidas la Junta ordenó disolver al grupo fascista Orden, reconoció los derechos políticos y sindicales, concedió amnistía general a los exiliados y presos políticos, aumentó 29% el salario de los obreros agrícolas y decretó la rebaja del precio de los alimentos básicos en 40 por ciento.

La exigencia de las fuerzas democráticas de que la Junta de Gobierno avanzara rápidamente en el cumplimiento de su propio programa causó una crisis que culminó con la renuncia de dos de los ci-

viles que pertenecían a ella. Asimismo, renunciaron todos los ministros y viceministros, excepto el de la Defensa, quien ordenó reprimir las manifestaciones populares.

La apreciación general es que en El Salvador hay actualmente un agudo proceso de lucha. De un lado están la oligarquía, las corrientes derechistas de las fuerzas armadas, el grupo Orden y la democracia cristiana, que actualmente tienen el poder y desean consolidarse en él, con el apoyo de Estados Unidos. En el otro están las fuerzas populares, las organizaciones de izquierda, los sectores nacionalistas del ejército y buena parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, quienes pugnan por cumplir al menos con la primera proclama de la Junta de Gobierno.

La agitación de las masas populares, la superación de las discrepancias de las fuerzas democráticas y el incumplimiento del programa inicial han llevado a realizar manifestaciones populares cada vez más combativas. Empero, los mandos superiores de las fuerzas armadas han ordenado nuevamente la represión, regresando de hecho a los métodos que empleaba el depuesto presidente Romero. Así, se estima que en las dos últimas semanas del año pasado, 44 personas murieron a causa de la represión de las manifestaciones. Asimismo, se afirma que al tratar de disolver una manifestación el 22 de enero, hubo más de un centenar de muertos.

Por lo pronto, el movimiento popular sigue en pie y, a menos que los sectores conservadores y reaccionarios puedan aplastarlo a sangre y fuego —hecho que casi todos los observadores y comentaristas consideran imposible— lo más probable es que se llegue a un nuevo acuerdo que abra la ruta del desarrollo democrático de ese país centroamericano. □

Jamaica

Manley reduce el Gabinete

El 17 de diciembre el Gabinete presentó su renuncia para que el primer Ministro, Michael Manley, procediera a reorganizar su gobierno. La causa de esta dimisión es la difícil situación económica que afecta a Jamaica. En 1979, la inflación llegó a 15% y el déficit presupuestal a 125 millones de dólares, superior a lo acordado con el FMI. En 1980 el país requerirá créditos externos por 250 millones de dólares, para lo cual será nece-

sario contar con el aval del FMI, que exigirá varias medidas estabilizadoras, entre las que figura reducir los gastos corrientes del Gobierno. □

Nicaragua

Se suspenden las confiscaciones

A finales de noviembre último, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emitió un decreto que prohíbe a las autoridades civiles y militares realizar confiscaciones de bienes muebles e inmuebles al amparo del decreto número tres, emitido por la propia Junta horas después de su instalación, el 22 de agosto de 1979. El Gobierno también descongeló centenares de cuentas bancarias que estaban bajo investigación y suspendió el decreto 155, que autorizaba incautar bienes muebles en los hogares de personas sospechosas de haber sido somocistas.

Estas medidas fueron adoptadas debido a que se ha registrado un "notorio desaliento en la producción".

Retiro del embajador nicaragüense en Honduras

Como resultado del deterioro de las relaciones entre Nicaragua y Honduras, el Gobierno Provisional retiró a su embajador, así como a la mayoría del personal diplomático acreditado. □

Panamá

Refugio del tirano

Mohammed Reza Palevi, ex-cha de Irán, recibió asilo político del Gobierno de la República de Panamá, país a donde arribó el 15 de diciembre para habitar en la Isla Contadora. Reza Palevi ha sido reclamado oficialmente por el actual Gobierno de Irán, acusado de numerosos crímenes contra la población iraní y del robo de varios cientos de millones de dólares pertenecientes al Estado.

Al negarle el Gobierno de México la renovación de su visa turística, el ex-cha tuvo que trasladarse de Estados Unidos a Panamá, país en donde fue recibido con grandes muestras de repudio popular, especialmente del estudiantado. □

Perú

Renegociación de contratos petroleros

El Gobierno de Perú autorizó a la empresa estatal Petroperú para que renegocie todos los contratos petroleros actualmente vigentes, señalando que "la explotación de los recursos petroleros es prioritaria, de utilidad pública e indispensable para la seguridad integral del Estado". Se señala que, entre las consideraciones que motivaron esa medida, destacan la conveniencia de optimizar los resultados que se obtengan de los contratos petroleros y proveer los medios que permitan su adecuación a las cambiantes condiciones del país.

De acuerdo con el nuevo ordenamiento, en adelante los contratos serán aprobados por Decreto Supremo expedido con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado por los ministros de Economía y de Energía y Minas. □

Puerto Rico

II Conferencia Internacional de Solidaridad con la Independencia puertorriqueña

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se realizó en México la II Conferencia Internacional de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico, a la cual asistieron más de 400 personas de todos los países del mundo. El objetivo central de la Conferencia fue mostrar al mundo la creciente solidaridad internacional con la independencia del pueblo puertorriqueño.

Violencia en la isla

En los primeros días de diciembre, algunos sectores del movimiento independentista puertorriqueño pusieron en marcha tácticas de guerra. El primer atentado fue contra un autobús de la Marina de Guerra estadounidense, donde murieron dos *marines*.

Al comentar el hecho, Juan Mari Bras, dirigente del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), señaló que es preciso que las fuerzas políticas logren conformar un criterio de procedimiento para la descolonización de la isla y evitar una escalada de violencia. Agregó que "mientras haya agresores no puede pe-

dírseles a los agredidos que se crucen de brazos en espera de que se les siga victimando impunemente".

Maniobras navales en el Caribe

El 14 de enero, 31 naves de guerra de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda iniciaron las maniobras militares "Readiness Exercise I-80", en aguas de Puerto Rico. El programa incluyó combates contra fuerzas navales "enemigas" y prácticas de tiro en la Isla de Vieques. Las operaciones fueron obstaculizadas mediante el ingreso de una decena de embarcaciones de pescadores en la zona de fuego. □

San Vicente

Estado de excepción

El Gobierno de San Vicente decretó el estado de excepción en la capital, Kingstown, a raíz de una rebelión que estalló en la isla Unión, del conjunto Granadinas, bajo su jurisdicción. □

Uruguay

Se anuncia una transición hacia la normalidad institucional

Aparicio Méndez dijo que el régimen que él preside "es profundamente normal, en atención a las circunstancias y en consideración a lo que se persigue". Ratificó el anuncio hecho en agosto pasado, de que en 1980 se celebrará un plebiscito sobre una nueva constitución y en 1982 habrá elecciones para designar a su sucesor. Ya se ha establecido que en éstas habrá un candidato único, quien deberá contar con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. □

Venezuela

No aumentará su producción petrolera

El presidente Luis Herrera Campins manifestó que es difícil comprometerse a un aumento en la producción petrolera venezolana, ya que no se ha planteado la posibilidad de aumentar las ventas de petróleo a Estados Unidos. Agregó que la capacidad productiva se ha fijado en un tope de 2.2 millones de barriles diarios, la cual está acorde con el potencial de producción. □